

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA TRAMITACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES Y DE LOS SERVICIOS A MENORES Y LA FAMILIA DE MALLORCA

Antecedentes de la norma

El artículo 24 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales, establece que la cartera de servicios sociales es el instrumento que determina el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales, incluyendo todas las prestaciones técnicas, económicas y tecnológicas. El artículo 27 y la Disposición final cuarta del mismo texto legal disponen que la cartera básica de servicios sociales que aprueba el Gobierno de las Islas Baleares debe ser complementada por las carteras de servicios sociales de los Consejos Insulares, de forma que cada Consejo Insular, en el marco de sus competencias propias, definirá las prestaciones propias, siempre desde los principios de coordinación general y de complementación.

El artículo 70 de la LO 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, otorga al Consejo de Mallorca competencias propias en materia de servicios sociales y asistencia social. En este sentido, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, como organismo autónomo local creado por el Consejo de Mallorca y adscrito al Departamento de Bienestar y Derechos Sociales del Consejo de Mallorca, es quien ejerce las competencias atribuidas por cualquier título al Consejo de Mallorca en materia de servicios sociales y menores.

La Cartera de servicios sociales y de los servicios a menores y familia de Mallorca fue aprobada en fecha 13 de julio de 2017 (publicada en el BOIB núm. 97, de 18 de julio de 2017 y corrección de errores materiales publicada en el BOIB núm. 161, de 30 de diciembre de 2017). La vigencia de esta Cartera finaliza el 18 de julio de 2021, por lo tanto es necesario tramitar una nueva que se ajuste a las necesidades actuales de la sociedad, a fin de cumplir con la función primordial de sistematización, clasificación y definición de las prestaciones sociales del sistema público de servicios sociales de aplicación en toda la isla de Mallorca, en base al principio de seguridad jurídica.

	<p>La aprobación de la primera Cartera de Mallorca permitió alcanzar un hito muy importante y un salto cualitativo en la normativa de los servicios sociales y de la infancia y la familia de nuestra isla, definiendo el marco necesario para la acreditación de las entidades y el acceso a la concertación social .</p>
Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma	<p>La cartera de servicios sociales y de los servicios a menores y familia de Mallorca debe recoger, de forma sistematizada, las prestaciones que el sistema ofrece a la ciudadanía según las diferentes situaciones de necesidad social. La información contenida debe estar actualizada y debe ser accesible a todas las personas que puedan ser beneficiarias. Dado el tiempo transcurrido desde la redacción de las prestaciones incluidas en la vigente Cartera y las modificaciones sufridas por la sociedad como consecuencia, entre otras, de la situación de pandemia debido a la Covid-19, es conveniente valorar las siguientes circunstancias :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la posibilidad de incluir nuevas prestaciones • la adaptación de las prestaciones a la realidad social y económica presente • las aportaciones realizadas dentro el ámbito de los menores y la familia por parte de las entidades que participaron en la consulta pública realizada en el año 2018 y que no se llegó a tramitar
Justificación de la necesidad y oportunidad de la aprobación	<p>La Cartera de Servicios del IMAS vigente recoge los servicios que se prestaban en el IMAS en el momento del inicio de los trámites de la aprobación de la misma. Se considera necesario llevar a cabo una análisis exhaustiva de todos y cada uno de los servicios i adaptarlos a las necesidades actuales que permita garantizar unos servicios sociales adecuados para encarar la realidad actual y futura en este ámbito.</p>
Objetivos de la norma	<p>Determinar las prestaciones que integran el sistema público de servicios sociales de Mallorca, con el detalle que determina el art. 24 y concordantes de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales.</p>